
GUERRA INSURGENTE, NEGOCIACIÓN DE CONFLICTO Y MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA.[∞]

ARIEL ÁLVAREZ RUBIO^{*}

RESUMEN

El presente artículo da cuenta de un análisis referido a la guerra insurgente y al proceso de negociaciones emprendido entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Este estudio abarca tanto la teoría de negociación de conflictos aplicada al caso colombiano como también los resultados de dichas negociaciones. Finalmente, se efectúan algunas reflexiones en relación al complejo escenario posconflicto, abarcando temáticas tales como la eventual reducción de efectivos de la Fuerza Pública, la desmovilización e incorporación a la sociedad de las guerrillas de las FARC y la construcción de la Memoria Histórica del conflicto armado interno en Colombia.

Palabras clave: Guerra Insurgente, Negociación de Conflictos, Desmovilización de las FARC.

INSURGENT WAR, NEGOTIATION OF CONFLICT AND HISTORICAL MEMORY IN COLOMBIA

ABSTRACT

This article reports an analysis based on the insurgent war and the process of negotiations undertaken between the government and the FARC. This study covers both conflict negotiation theory applied to the Colombian case as well as the results of these negotiations. Finally, some insights are made regarding the complex post-conflict scenario, covering issues such as the possible downsizing of the

^{*} Este artículo es resultado de la tesis doctoral "La toma de rehenes como acto terrorista internacional. Un análisis integrado de los casos de Perú y Colombia" del Programa de Doctorado en Estudios Americanos mención Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

^{**} General de Brigada Aérea (Ret.) de la Fuerza Aérea de Chile, Ingeniero en Sistemas de Armas (Academia Politécnica Aeronáutica), Magíster en Ciencias de la Administración Militar (Academia de Guerra Aérea), Magíster en Gestión de RR.HH. (Universidad Gabriela Mistral), Magíster en Humanidades mención Historia (Universidad Adolfo Ibáñez), y Doctor en Estudios Americanos mención Estudios Internacionales (Universidad de Santiago de Chile). En la actualidad se desempeña como Asesor Docente y Profesor Militar de la Academia Politécnica Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Chile. atila2648@hotmail.com

[∞] Fecha de recepción: 100315
Fecha de aceptación: 040615

Armed Forces (Public Forces), demobilization and integration into society of the guerrillas of the FARC and the construction of the historical memory of the internal armed conflict in Colombian.

Key words: *Insurgent War, Conflict Negotiation, Demobilization of the FARC.*

I. INTRODUCCIÓN

Los sucesos producidos durante el presente año dan cuenta de las dificultades que enfrenta el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ante una más que aparente falta de credibilidad ciudadana respecto del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Profundizando en el tema, recientemente se ha dado a conocer una encuesta de la firma IPSOS¹, que refleja un nivel de desaprobación a la gestión del mencionado Mandatario que alcanza cifras cercanas al 71%, en tanto que solo un 29% de encuestados manifiesta que se encuentra realizando una buena tarea².

Las mayores críticas a Santos dicen relación con su gestión de las negociaciones de paz con las FARC en La Habana las cuales, como sabemos constituyen su gran apuesta personal y política. Entre los encuestados existe un elevado nivel de pesimismo (69%), respecto a que las negociaciones culminen con un acuerdo de paz y la desmovilización de la guerrilla³.

Debemos recordar que cuando Santos asumió su primer gobierno, en 2010, lo hizo siguiendo la “línea dura” de su antecesor, Álvaro Uribe (2002-2010) y en este contexto se propinaron exitosos golpes a la estructura de las FARC, tales como las operaciones “Sodoma”⁴ y “Odiseo”⁵, realizadas durante los años 2010 y 2011, respectivamente.

1 IPSOS es una compañía de investigación fundada en París, Francia, el año 1975. En la actualidad se encuentra presente en 64 países, desarrollando su actividad en cinco especialidades principales: publicidad, marketing, medios, opinión pública y estudios de lealtad (N. del A.).

2 *EL MERCURIO*; “Respaldo ciudadano a la gestión de Santos, en caída libre”, edición del 11 de mayo de 2015, Cuerpo A, Santiago, Chile, p. 6.

3 *Idem*.

4 En esta operación, realizada el 20 de septiembre de 2010 en la zona de La Macarena, departamento de Meta, fue dado de baja Jorge Briceño alias “el Mono Jojoy”. Se estima que en las acciones de combate participaron cerca de dos mil efectivos de la Fuerza Pública, 30 aviones de combate y 25 helicópteros. El bunker donde permanecía refugiado el líder guerrillero fue destruido con bombas inteligentes y el ataque produjo 20 bajas entre los guerrilleros (N. del A.).

5 Producto de esta acción, realizada el 4 de noviembre de 2011 en la zona de Suárez, departamento del Cauca, resultó muerto Guillermo Sáenz Vargas alias “Alfonso Cano” quien a esa fecha se desempeñaba como Comandante del Bloque Central, Comandante en Jefe y miembro del Secretariado de las FARC. Durante la operación se realizaron bombardeos aéreos y desembarco de tropas helitransportadas (N. del A.).

Sin embargo, a partir del año 2012 Santos modificó su estrategia e inició las negociaciones con la guerrilla, lo cual creó un distanciamiento total de su antecesor y, al mismo tiempo, originó una gran cantidad de especulaciones en donde destacaron las expectativas negativas respecto de los eventuales resultados que derivarían de esas negociaciones con la guerrilla.

Entre las críticas más duras al actual gobierno de Colombia sobresalen las opiniones vertidas por Alfredo Rangel, un reconocido experto en el conflicto colombiano y asesor en temas de seguridad del ex presidente Álvaro Uribe, quien señaló:

Creo que el proceso no se va a sostener. En algún momento del año habrá una ruptura, porque ni siquiera hay un acuerdo base sobre la agenda de cinco puntos⁶.

En ocasión anterior, el mismo Rangel ya había señalado que:

Hay una enorme desconfianza en la opinión pública respecto de eventuales negociaciones de paz con las FARC, en el momento en que la guerrilla está escalando sus acciones terroristas en todo el país y adicionalmente parece que estas negociaciones se van a iniciar sin que haya una tregua, sin un cese de las acciones terroristas de la guerrilla contra la población, lo cual estaría repitiendo los errores del pasado, cuando se realizaron diálogos en medio de la confrontación⁷.

Por su parte, el propio ex presidente Álvaro Uribe también emitió fuertes críticas a este proceso argumentando que:

El diálogo con la guerrilla servirá nada más que para la reelección de Hugo Chávez en Venezuela... El gobierno se encuentra alimentando artificialmente el conflicto... Los generales van a terminar en la cárcel y los guerrilleros en el congreso⁸.

Ahora bien, si dejamos de lado, aunque sea momentáneamente, estas críticas a los procesos de negociación entre “actores armados”, es posible señalar que cuando se analizan los resultados de las guerras insurgentes a lo largo de la historia, se puede constatar que no siempre terminan con la derrota absoluta de uno de los dos bandos, lo que implicaría la toma del poder absoluto por parte de la guerrilla o la victoria del Estado y la permanencia del *statu quo*. En efecto, en más de alguna oportunidad, la imposibilidad de obtener una victoria clara por

6 *EL MERCURIO*; “La paz con las FARC y las repercusiones de La Haya marcarán el 2013 de Santos”, edición impresa del 2 de enero de 2013, Cuerpo A, Santiago, Chile, p. 6.

7 *EL MERCURIO*; “El Presidente Santos admite contactos con las FARC para iniciar un eventual proceso de paz”, edición impresa del 28 de agosto de 2012, Cuerpo A, Santiago, Chile, p. 4.

8 *Idem*.

una de las partes ha obligado a realizar una negociación para dar por terminada la confrontación.

II. GUERRA INSURGENTE, NEGOCIACIÓN DE CONFLICTO Y MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA

A. LA TEORÍA DE LA NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS Y EL CASO COLOMBIANO

Es el propio Alfredo Rangel quien ha señalado que en términos muy generales:

La teoría de la negociación sostiene que las guerras empiezan porque ambas partes tienen valores que excluyen del espacio una posible negociación. En la mayoría de los casos, las guerras empiezan porque una de las partes demanda más de lo que la otra está dispuesta a conceder, ambas tienen términos de eventuales acuerdos que en principio son incompatibles, y cada bando espera satisfacer estos términos a través de la guerra, de la que espera mejores resultados que concediendo al oponente sus exigencias⁹.

Rangel también nos plantea que en el asunto de la insurgencia, en muchos casos la creencia de estar del lado del progreso histórico, de vislumbrar el triunfo del socialismo como un destino ineluctable de la humanidad y de sentirse, en tanto individuos organizados, como los ejecutores de esa misión, ha sido un factor ideológico que, a pesar de la precariedad de sus medios al inicio de la confrontación, los ha sostenido en su empeño de desatar y ganar una lucha armada contra el Estado. Las victorias alcanzadas por grupos insurgentes en otros países han sido también, según opinión de Rangel, un elemento que ha incrementado sus expectativas al comenzar las hostilidades y los han hecho rechazar en las primeras etapas cualquier posibilidad de acuerdo.

Pero las partes en guerra están de manera permanente frente a dos opciones: 1) continuar el combate; o 2) llegar a un acuerdo. En cada momento deben sopesar las consecuencias de cada opción. La de continuar la guerra incluye la evaluación de los costos adicionales frente a los potencialmente mejores o peores términos de un arreglo ulterior. Un acuerdo podría dejarlo potencialmente indefenso en una eventual próxima ronda de confrontaciones y tener importantes consecuencias en la política interna.

Este aspecto, según Rangel, es supremamente crítico para cualquier grupo insurgente. Por lo general un acuerdo con el Estado que incluya el desarme

9 RANGEL, Alfredo; "Guerra Insurgente. Conflictos en Malasia, Perú, Filipinas, El Salvador y Colombia", Intermedio Editores, Bogotá, Colombia, 2001, pp. 44-45.

y la desmovilización de la insurgencia, significa su desaparición como grupo armado y la virtual imposibilidad de reiniciar a futuro la lucha armada, en caso de que el resultado del desarrollo de los acuerdos no sea totalmente satisfactorio. Si esto ocurre, los dirigentes no podrán evitar el desprestigio y desaparecerá su autoridad para aglutinar y movilizar nuevamente a sus seguidores.

Para que la guerra termine no por medio de un triunfo definitivo y absoluto de una parte sobre la otra que obligue a su capitulación, sino por medio de una negociación, Rangel sostiene que al menos para una de las partes las expectativas acerca de la continuación de la guerra y sobre la posibilidad de un acuerdo deben cambiar: “la guerra debe ser menos atractiva, o más atractivo el acuerdo”¹⁰.

En términos de la negociación, una condición indispensable es que se abra el espacio para ella y esto requiere que las expectativas de la ganancia de un acuerdo se incrementen en relación con las posibilidades de la utilidad de continuar el combate. Estas últimas evolucionan cuando alguna de las partes cambia sus estimativos de sus probabilidades de victoria y de los costos esperados de la guerra.

Según Rangel:

Una guerra insurgente continuará desarrollándose mientras el máximo que una parte esté dispuesta a ceder sea menor que lo que la otra piensa conseguir mediante la confrontación, deducidos los costos que deba asumir en la misma¹¹.

Ahora bien, lo que cada parte está dispuesta a ceder y lo que la otra demanda dependen de la estimación que cada una haga de su fuerza relativa, la resolución y los costos esperados de la guerra.

En síntesis, los planteamientos de Rangel apuntan a que:

Una parte disminuirá sus objetivos bélicos cuando disminuya su estimación de su fuerza relativa y aumenten la estimación de la resolución de su oponente y su cálculo de los costos de la guerra¹².

En este orden de ideas, se puede deducir que el desarrollo de la confrontación no solo le revela a cada parte nueva información sobre sus posibilidades sino que vuelve pública esta información.

Ahora bien, la guerra insurgente que afecta a Colombia, con más de cincuenta años de existencia, es probablemente uno de los conflictos armados más complejos a nivel mundial. Tiene su origen con el surgimiento de movimientos

10 *Ibidem*, p. 46.

11 *Ibidem*, p. 48.

12 *Ibidem*, p. 50.

guerrilleros que se consideran principales, y entre los cuales se encuentran las FARC-EP¹³.

Esta guerra insurgente ha sido acompañada por una complejidad creciente debida, por una parte, a la extorsión ejercida por la guerrilla sobre civiles y sus actividades económicas; y por otra, debido a la inserción del narcotráfico en la promoción de acciones de algunos grupos de autodefensa contra las guerrillas y de alianzas de seguridad entre guerrilleros y narcotraficantes alrededor de los cultivos ilícitos.

Durante los años 90 el conflicto interno se agudizó como consecuencia del fortalecimiento de los vínculos financieros entre las organizaciones armadas al margen de la ley con el negocio del cultivo y tráfico ilegal de drogas. Los conflictos sociales y la inseguridad ciudadana también se incrementaron durante estos años como consecuencia del narcotráfico pues este no solo debilitó las instituciones de justicia y policía, sino que profundizó la corrupción contaminando las relaciones sociales y comunitarias básicas del tejido social.

En este contexto, en el año 1998, durante el gobierno de Andrés Pastrana, se estableció el Plan Colombia, el cual en lo referido al conflicto armado con las facciones guerrilleras buscaba establecer un proceso de acuerdo de dicho enfrentamiento. La idea de esta negociación política se veía como un elemento esencial para lograr la paz en Colombia y consideraba establecer acuerdos con los grupos armados y garantizar la sostenibilidad de los mismos, mediante la discusión y concertación sobre las reformas que permitieran la superación de las causas que alimentaban la violencia en el país.

En la práctica, el proceso de paz derivado del Plan Colombia se extendió hasta el año 2002 pero, aparte de ciertos avances teóricos y documentales, las tensiones y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso. De hecho, la creación de la llamada zona de distensión consistente en una zona desmilitarizada de 40.000 km², derivó en que las FARC lograran una presencia urbana e implantaran, incluso, una administración armada contra la población civil como parte de su proyecto revolucionario¹⁴.

Con la llegada de Álvaro Uribe al poder se inicia una nueva etapa en la lucha contra las FARC, toda vez que se implanta en forma secuencial tanto una Política de Seguridad Democrática como una Política de Consolidación de la

13 En sus comienzos las FARC se organizaron con un modelo típico de guerrilla a semejanza de otros grupos insurgentes latinoamericanos surgidos a partir de la década de los años 50. Sin embargo, en 1982, en la Séptima Conferencia Nacional de Guerrilleros, se decidió la transformación de esa organización guerrillera en un ejército pasando a denominarse FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo). A partir de ese momento se constituyeron como un ejército jerarquizado con 60 Frentes orientados hacia las principales ciudades del país (N. del A.).

14 Uno de los mayores cuestionamientos al actual proceso de negociación deriva, fundamentalmente, de la desastrosa experiencia sufrida por los acuerdos logrados por las FARC-EP frente al gobierno de Andrés Pastrana (N. del A.).

Seguridad Democrática. Gracias a la estrategia derivada de ambas políticas, en la actualidad las FARC viven el peor momento de su historia: están en el mismo punto donde empezaron hace más de 50 años pero, con una gran diferencia, la organización de hoy no tiene futuro¹⁵.

A la fecha, el Estado colombiano le ha asestado severos y contundentes golpes a las FARC en el plano político, militar e internacional¹⁶. Por lo tanto, la organización se encuentra cada vez más lejos del objetivo que une a miles de sus integrantes bajo el mando de su Secretariado. Sin embargo, las FARC aún no han sido derrotadas, y todavía representan una seria amenaza a la seguridad nacional de Colombia, ya que mantienen una no despreciable capacidad militar y fuentes de financiamiento que les reportan importantes recursos, como es el caso particular del narcotráfico y el secuestro, actividades que se complementan con acciones de corte terrorista.

Frente al problema de la guerrilla, a partir del gobierno de Álvaro Uribe se puso en marcha en Colombia una respuesta militar adecuada al imperativo político que planteaba la amenaza guerrillera; en este contexto, la opción política consideró dejar abierta la posibilidad de una solución política, para golpear a la guerrilla en el terreno militar y así obligarla a negociar. Desde el punto de vista de la teoría de la estrategia militar, para acometer en contra de la guerrilla el gobierno de Álvaro Uribe consideró la puesta en marcha de una “guerra limitada”¹⁷, descartando una “guerra de aniquilamiento”¹⁸; en este contexto, se partió del supuesto que no era posible el aniquilamiento del enemigo y, por lo tanto, se privilegió su debilitamiento progresivo.

15 El presidente Uribe logró establecer una “Política de Seguridad Democrática”, que resultó notoriamente exitosa. Derivada de esta política de gobierno, se creó una estrategia global que otorgó el piso necesario para sostenerla y donde resalta la creación de un Comando Conjunto, la activación de un Plan de Campaña y la estructura de una Fuerza adecuada (denominada “Fuerza de Tarea Omega”) cuyo esfuerzo principal rindió exitosos frutos (N. del A.).

16 A partir del año 2008 se han ejecutado exitosas acciones tácticas favorables al gobierno, de entre las cuales se pueden destacar las siguientes: 1) la muerte del 2° de las FARC, Raúl Reyes, como resultado de la Operación “Fénix” ejecutada en territorio de Ecuador el año 2008; 2) el rescate de 15 rehenes en poder de las FARC mediante la exitosa Operación “Jaque” el año 2008; 3) la muerte del jefe militar de las FARC, el “Mono Jojoy”, mediante la Operación “Sodoma” y consistente en un ataque a su campamento en el departamento de Meta el año 2010; y 4) la muerte del jefe máximo de la guerrilla, Alfonso Cano, como resultado de la Operación “Odiseo” ejecutada en el valle del Cauca el año 2011 (N. del A.).

17 Una guerra limitada parte del supuesto que el aniquilamiento del enemigo no es posible y por eso se orientaría más bien hacia su debilitamiento progresivo. Este planteamiento estratégico considera la acumulación de conquistas territoriales parciales como útil para desgastar al enemigo, para impedirle sus posibilidades de reorganizarse y para minarle su voluntad de continuar el conflicto. Esta estrategia de agotamiento se desarrolla a base de la batalla y de la maniobra. (Cfr. VON CLAUSEWITZ, Karl; “De la guerra”, editorial Labor/Punto Omega, Barcelona, España, 1984, pp. 22 y ss.).

18 Una guerra de aniquilamiento requiere de un ejército de masa y de una muy amplia disposición de los recursos de la Nación para suplir con solvencia los ingentes requerimientos del esfuerzo militar. La evaluación de resultados se haría, principalmente, por la cantidad de fuerza armada enemiga destruida. La conquista de territorio no tendría utilidad y siempre se estaría buscando la batalla decisiva que definiera el conflicto (Cfr. VON CLAUSEWITZ, Karl; “De la guerra”, *Loc. cit.*

El resultado de todas estas acciones, a juicio del autor, han permitido que hoy en día las FARC se hayan visto presionadas a sentarse a la mesa de negociaciones, pero solo el tiempo y la calidad de la discusión determinarán los verdaderos resultados de las mismas.

B. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN EN COLOMBIA

El objetivo de los diálogos de negociación, según el gobierno colombiano “es poner término al conflicto” y según las FARC “es buscar la paz con justicia social por medio del diálogo”. Estos diálogos se iniciaron en Oslo y en la actualidad se desarrollan en La Habana, Cuba. Hasta ahora, el diálogo ha logrado tres acuerdos parciales sobre el desarrollo agrícola, la participación de la guerrilla en la política y la lucha contra el narcotráfico.

Pese a los avances y a una tregua unilateral declarada por las FARC en diciembre del 2014, el escenario ha empeorado durante los últimos meses especialmente por el ataque guerrillero a un campamento militar en la región del Cauca, que el 15 de abril de 2015 dejó un saldo de 11 soldados muertos, un episodio que fracturó notablemente el proceso de paz y golpeó fuertemente la popularidad de Santos, pese a su agresiva respuesta ante estos hechos¹⁹.

Estas nuevas medidas han tenido una expresión violenta, y de hecho el mismo día que el gobierno y las FARC retomaron sus conversaciones de paz en La Habana dando inicio a la trigésimo séptima ronda de diálogo, la fuerza aérea colombiana realizó un bombardeo en una zona selvática de Colombia, cerca del municipio de Gauapi en el departamento del Cauca, una región considerada estratégica para el tráfico de drogas y de armas en donde la guerrilla tiene una fuerte presencia²⁰. Posteriormente, se realizó otro bombardeo en las afueras de Segovia, en el departamento de Antioquia²¹.

19 Como respuesta a este ataque, Santos levantó la orden de suspender los bombardeos de las Fuerzas Armadas contra los campamentos de las FARC. El Mandatario justificó su decisión como un producto del “ataque deliberado y no fortuito de la guerrilla, lo que implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral”. Cfr. UNIVISIONNOTICIAS; “Santos reanuda operaciones aéreas a las FARC tras ataque que dejó 11 soldados muertos”, edición digital del 15 de abril de 2015 en: <http://noticias.univision.com/article/2303813/2015-04-15/america-latina/colombia/al-menos-10-militares-colombianos-mueren-en-ataque-guerrillero> (última visita: 20 de mayo de 2015).

20 La operación fue ejecutada el 21 de mayo de 2015, en contra de alias “Javier”, el segundo comandante del Frente 29 de las FARC, desconociéndose hasta la fecha si el jefe guerrillero resultó o no abatido. No obstante, como resultado de las acciones de bombardeo, 18 guerrilleros resultaron abatidos y se pudo incautar armamento y equipos de comunicaciones. Este ha sido considerado uno de los golpes más fuerte que ha sufrido la guerrilla desde que se inició la negociación de paz en Cuba, y se produjo un mes después que las FARC rompiera la tregua unilateral con un ataque en que resultaron muertos 11 militares en la misma región. Cfr. *EL MERCURIO*; “Mueren 18 guerrilleros de las FARC en operación militar en el suroeste de Colombia”, edición impresa del 22 de mayo de 2015, Cuerpo A, Santiago, Chile, p. 4.

21 En esta nueva acción de la fuerza aérea colombiana, resultaron muertos 8 guerrilleros pertenecientes al Frente N° 4 de las FARC. Cfr. *EL MERCURIO*; “Ocho muertos en bombardeo contra las FARC”, edición impresa del 24 de mayo de 2015, Cuerpo A, Santiago, Chile, p. 5.

Según analistas y políticos, Santos solo puede revertir el negativo escenario que enfrenta mostrando una posición más firme en las negociaciones con la guerrilla, con una mayor presencia en las discusiones de los asuntos públicos y con un cambio en la cúpula de la Policía Nacional, dado el clima de inseguridad²².

En este contexto, y antes estas presiones, el presidente Santos ha iniciado un enroque en uno de los puestos que se consideran claves para llevar a cabo el actual proceso de paz, designando como Ministro de Defensa a Luis Carlos Villegas, un abogado y empresario que actuó como negociador en la primera etapa de las conversaciones en La Habana, y que ha sido clave para consolidar el apoyo de Estados Unidos a los diálogos²³.

Este relevo ministerial refleja la “apuesta” que hace Santos por los avances en la negociación, en momentos en que esta parece tomar su recta final, pese a las dificultades e interferencias producidas durante el presente año.

El nuevo ministro reemplazará en su cargo a Juan Carlos Pinzón²⁴, considerado el principal vocero del ala dura del gobierno de Santos, y uno de los últimos “críticos” de la guerrilla izquierdista, luego que en febrero de 2014 Santos ordenara la renovación de la cúpula militar, una decisión que fue vista como una necesidad del Mandatario de poner al frente a personas más afines a las negociaciones.

Al respecto, es necesario destacar que muchos analistas veían a Pinzón muy asociado con la guerra y la política de seguridad ciudadana impulsada por el ex presidente Álvaro Uribe para debilitar a las guerrillas de izquierda activas en el país. Estos mismos analistas consideran que, por el contrario, Villegas es un político y empresario de peso capaz de gestionar intereses diversos²⁵.

De hecho, según declaraciones del propio Director del Centro de Recursos para Análisis de Conflicto (CERAC), Jorge Alberto Restrepo:

Luis Carlos Villegas va a ser un Ministro de construir paz en el sentido de preparar a las instituciones militares para lo que se necesita, que es una reconversión hacia un escenario de término del conflicto²⁶.

22 *EL MERCURIO*; “Respaldo ciudadano a la gestión de Santos, en caída libre”, edición impresa del 11 de mayo de 2015, Cuerpo A, Santiago, Chile, p. 6.

23 *EL MERCURIO*; “Un nombramiento impulsado por el proceso de paz con las FARC”, edición impresa del 21 de mayo de 2015, Cuerpo A, Santiago, Chile, p. 6.

24 Durante sus funciones como Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón lideró duros golpes contra la guerrilla, entre los cuales destaca la operación destinada a dar muerte al máximo líder de las FARC, alias “Alfonso Cano”. Por esta y otras acciones, Pinzón era considerado uno de los más leales colaboradores a Santos (N. del A.)

25 La experiencia que posee Juan Carlos Villegas en los diálogos de La Habana se estima que serán claves para su nuevo rol. Este dejó su lugar como negociador del gobierno a fines del 2013, luego que, como presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), representó al gremio en la discusión de un punto de la agenda que le interesaba de manera particular: “tierras y desarrollo rural” (N. del A.).

26 *Idem*.

El cambio de Ministro de Defensa se dará justo cuando el gobierno encamina sus pasos hacia un cese bilateral del fuego con las FARC y prepara las variaciones que requiere el posconflicto. Estas incluyen una “reingeniería” de las Fuerzas Armadas colombianas. Por otra parte, el nuevo ministro también tendrá que liderar con la policía el proceso de transición tras el fin de la aspersión con “glifosato”²⁷ en los cultivos ilícitos.

Respecto a esta medida de suspender la aspersión con glifosato, Santos ha pedido que no se interprete su decisión como un “debilitamiento de nuestra política contra el narcotráfico” y ha señalado que ha dado instrucciones al Ministerio de Defensa para que se revise el trabajo del Estado contra “los otros eslabones” de la cadena del narcotráfico²⁸.

Con lo anterior, Colombia estaría demostrando un “alejamiento” de la estrategia tradicional de EE.UU. contra el narcotráfico, basada en la fumigación de las plantaciones de coca. Esta decisión de Colombia, uno de los aliados más cercanos a Washington en la región, tiene un fuerte sentido “simbólico” toda vez que fue tomada a pesar de las objeciones de este²⁹.

Este tema reviste especial interés, ya una vez logrado cualquier acuerdo derivado de la actual negociación de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, necesariamente se deberá planificar y ejecutar nuevas medidas destinadas a la lucha contra el narcotráfico, donde existe gran diferencia de políticas regionales al respecto³⁰.

27 Con fecha 9 de mayo de 2015, el presidente Santos anunció que pedirá al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) que suspenda la aspersión con glifosato, un potente herbicida empleado para eliminar cultivos ilícitos, y sobre cuyo uso se ha abierto un debate debido a su efecto cancerígeno. En la misma ocasión, Santos anunció un “período de transición” que no puede ir más allá del 1 de octubre de 2015, en el que se deben buscar mecanismos para reemplazar las aspersiones con dicho herbicida y encontrar otros mecanismos, tales como “intensificar la erradicación manual y otros instrumentos que permitan seguir combatiendo ese eslabón de la cadena del narcotráfico”. Cfr. ELCORREO.COM; “Colombia suspende la aspersión con glifosato de cultivos ilícitos”, edición digital del 9 de mayo de 2015 20:37, en: <http://www.elcorreo.com/alava/internacional/america-latina/201505/09/colombia-suspende-aspersion-glifosato-20150509200252-rc.html> (última visita: 21 de mayo de 2015).

28 *Idem*.

29 Según William Brownfield, subsecretario de Estado de EE.UU. en asuntos de narcotráfico internacional: “esta medida demuestra que la región, en general, se encontraría en un punto de transición respecto de las drogas, y donde el debate acerca del tema es un avance positivo, ya que pueden adoptar reformas moderadas y razonables en la política internacional del control de drogas”. Cfr. *EL MERCURIO*; “Países de la región se apartan cada vez más de la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico”, edición impresa del 22 de mayo de 2015, Cuerpo A, Santiago, Chile, p. 6.

30 A modo de ejemplo se puede señalar que Bolivia, luego de expulsar a la DEA de su territorio, ha avanzado en un sistema que permite a los granjeros cultivar parcelas de coca sin sumarse aún a una “legalización” de la coca ni de otras drogas. Por su parte, Perú debate en la actualidad una ley que permitiría el “derribo” de aviones sospechosos de transportar drogas, con lo cual se volvería a implantar una medida prohibida desde el año 2001 (N. del A.).

C. LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

En esta etapa del presente análisis nos parece oportuno recordar que Colombia ha sufrido una escalada de violencia desde 1949, o incluso en fecha anterior, y que la versión actual de esta se encuentra presente desde hace más de 50 años, todo lo cual ha producido un grave daño tanto al país como a sus habitantes, sobre todo por el uso indiscriminado del terrorismo por parte de las FARC.

Es en este contexto donde cobran plena validez los dichos de Juliana Castellanos Díaz³¹, quien señala:

Visualizar los costos económicos de este conflicto armado es una labor que permite dimensionar la crueldad del fenómeno y finiquitar la paradoja que divide al país en uno que invierte cantidades asombrosas en la guerra y otro que, en consecuencia cuenta, con recursos mínimos para asegurar la calidad de vida a sus ciudadanos a través del desarrollo equitativo³².

Por otra parte, Juliana Castellanos también asevera que “pese a la estabilidad económica que el país ostenta en los últimos años, el conflicto armado ha inhibido un avance de mayor envergadura y que, de no tenerse, Colombia sería un modelo a seguir”³³. Como sea, la cuestión es compleja por tratarse de uno de los conflictos más viejos del mundo, que ha frustrado el desarrollo social, político y económico, sobre todo de las áreas rurales.

Los costos que ha producido el conflicto armado interno abarcan tópicos muy disímiles, tales como: 1) destrucción de vidas humanas y de infraestructura; 2) disrupción de la vida normal (inseguridad en las vías y aumento en gastos de seguridad); 3) desviación de fondos para enfrentar el conflicto (inversión del Estado en material de guerra); 4) transferencia de las inversiones de privados hacia países más seguros; y 5) pérdida acumulada de crecimiento debido al *stock* acumulado de capital humano, físico y financiero³⁴.

Otro dato respecto a estos costos nos señala que en Colombia se destinan del presupuesto general de la nación aproximadamente 22 billones de pesos colombianos (alrededor de USD \$ 10.500 mil millones) anuales al sector de seguridad y defensa, lo que implica que en los últimos diez años el conflicto armado le ha costado al Estado, solo en ese frente, cerca de 220 billones de pesos colombianos (casi USD \$ 100.500 mil millones).

31 CASTELLANOS, Juliana; “¿Cuánto nos cuesta la guerra? Costos del conflicto armado colombiano en la última década”, Editorial del Politécnico Granacolombiano, Bogotá, Colombia, 2013.

32 CASTELLANOS, *op. cit.* p. 7.

33 *Idem.*

34 *Ibidem*, pp. 9-10.

En otro enfoque, el Grupo de Memoria Histórica-GMH³⁵, ha emitido un informe donde señala que Colombia tiene una larga historia de violencia, pero también una renovada capacidad de resistencia a ella. Rompiendo todos los cánones de los países en conflicto, la confrontación armada en este país discurre en paralelo con una creciente confrontación de memorias y reclamos públicos de justicia y reparación. En este contexto, el GMH ha resaltado que “la memoria se afincó en Colombia no como una experiencia del posconflicto, sino como factor explícito de denuncia y afirmación de diferencias”³⁶.

Al respecto, es necesario destacar que Colombia apenas comienza a esclarecer las dimensiones de su propia tragedia. El carácter invasivo de la violencia y su larga duración han actuado, paradójicamente, en detrimento del reconocimiento de las particularidades de sus actores y sus lógicas específicas, así como de sus víctimas. Durante décadas las víctimas fueron ignoradas tras los discursos legitimadores de la guerra bajo el descriptor peyorativo de “daños colaterales”. Desde esta perspectiva, las víctimas fueron consideradas como un efecto “residual” de la guerra.

Por su parte, Daniel Pécaut³⁷ ha expresado que:

El conflicto armado interno en Colombia desbordó en su dinámica el enfrentamiento entre los actores armados. De hecho, de manera progresiva, especialmente desde mediados de la década de los 90, la población ha sido vinculada a los proyectos armados, no por consentimiento sino que por coerción, al punto que algunos analistas han definido esta dinámica como “guerra contra la sociedad” o “guerra por población interpuesta”³⁸.

La violencia contra la población civil en el conflicto armado interno se ha distinguido por la sucesión cotidiana de eventos de pequeña escala tales como: 1) asesinatos selectivos; 2) desapariciones forzosas; 3) masacres con menos de seis víctimas; 4) secuestros; 5) violencia sexual; y 6) minas antipersonales. Todo esto dentro de una estrategia de guerra que deliberadamente apuesta por “ase-

35 El Grupo de Memoria Histórica (GMH) es un grupo de investigación perteneciente a la entonces denominada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que tiene como objetivo elaborar y divulgar una narrativa sobre el conflicto armado en Colombia que identifique “las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales” (Ley 975 de 2005), así como las distintas verdades y memorias de la violencia, con un enfoque diferenciado y una opción preferencial por las voces de las víctimas que han sido suprimidas o silenciadas. Además, el grupo formula propuestas de política pública que propicien el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (N. del A.).

36 GMH, *op. cit.* p.13.

37 PÉCAUT, Daniel; “Guerra contra la Sociedad”, Editorial Planeta, Bogotá, Colombia, 2001 y LAIR, Eric; “Reflexiones acerca del terror en los escenarios de guerra interna”, en *Revista de Estudios Sociales*, N° 15, junio 2003.

38 PÉCAUT, *op. cit.* p.88.

gurar el control a nivel local” pero, “reduciendo la visibilidad de su accionar en el ámbito nacional”.

En este conflicto los actores armados se han valido tanto de la “dosificación de la violencia” como de la “dosificación de la sevicia”, esta última sobre todo como recurso para aterrorizar y someter a las poblaciones. En este sentido, se ha podido confirmar que entre 1958 y 2012 el conflicto armado ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas, cifra que sobrepasa los cálculos hasta ahora sugeridos. Aparte de la enorme magnitud de muertos, se evidencia también un aterrador despliegue de sevicia por parte de los actores armados sobre la población civil. Esta ha sido una guerra “sin límites” en la que, más que las acciones entre combatientes, ha prevalecido la violencia desplegada sobre la población civil.

Según el GMH, en Colombia el conflicto armado interno no tiene una modalidad de violencia distintiva. Los actores armados enfrentados en este combate han usado todas las modalidades de crueldad. Todos han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, haciendo a la población civil la principal víctima del enfrentamiento. Si bien todos fundaron su estrategia en la agresión, no todos la han practicado con la misma intensidad ni con igual grado de crueldad³⁹.

El informe del GMH destaca que:

En el caso de los paramilitares, son quienes ejecutaron en mayor medida masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, e hicieron de la sevicia una práctica recurrente para incrementar su potencial de intimidación. Las guerrillas, por su parte han recurrido primordialmente a los secuestros, los asesinatos selectivos, y los atentados terroristas, además del reclutamiento forzado y el ataque a bienes civiles. Con respecto a la violencia ilegal de miembros de la Fuerza Pública, se ha podido establecer con base en testimonios y en sentencias judiciales el empleo de modalidades como detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas⁴⁰.

La probada participación de agentes estatales como perpetradores de crímenes ha resultado particularmente inquietante para la sociedad, el Estado en su conjunto, y para ellos mismos, dado el grado particular de legalidad y responsabilidad que les compete. Además de su participación directa en la violación de derechos humanos, todos los casos documentados por el GMH registran con notable regularidad la connivencia y las omisiones de miembros de la fuerza pública, con acciones violatorias de los derechos humanos y alianzas con grupos

39 El GMH en su análisis ha destacado fundamentalmente tres categorías de actores armados: 1) los paramilitares; 2) las guerrillas; y 3) los propios agentes del Estado o integrantes de la Fuerza Pública (N. del A.).

40 GMH, *op. cit.* p. 13.

poderosos que por métodos violentos defienden intereses económicos y políticos, o buscan el acceso a más tierra y/o recursos.

La complejidad del conflicto armado interno en Colombia, se evidencia a través de la variedad y alcance de las distintas modalidades de violencia presentes en dicha lucha, y entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 1) la convergencia entre el narcotráfico y los grupos militares; 2) las alianzas del crimen organizado con la Fuerza Pública; 3) la convergencia entre el proyecto paramilitar y los poderes local y regional asediados por la guerrilla; 4) la persecución y el exterminio de los líderes, movimientos y partidos de izquierda; 5) la disputa entre las FARC y los paramilitares por el control territorial; 6) la contienda entre distintos actores por el control de la economía regional de la coca; 7) el desplazamiento forzado y el destierro masivo de los habitantes; 8) la siembra de minas antipersonales; 9) el secuestro y la violencia sexual; 10) la sevicia y la tortura; y 11) la amenaza y las acciones bélicas, entre otras.

Ahora bien, como motor del origen y la perduración del conflicto se encuentra presente la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra, con lo cual se puede inferir que existe una convergencia gradual entre la guerra y el problema agrario. A estos viejos problemas vinculados con la tierra ahora se han sumado otros nuevos, tales como: 1) el narcotráfico; 2) la explotación minera y energética; 3) los modelos agroindustriales; y 4) las alianzas criminales entre paramilitares, políticos, servidores públicos, élites locales económicas y empresariales, y narcotraficantes.

Según el GMH, ver la violencia desde la perspectiva de la tierra y los territorios ha revelado otro rasgo distintivo de su historia: “la guerra se ha librado mayoritariamente en el campo colombiano, en los caseríos, veredas y municipios, lejos y apartados del país central o de las grandes ciudades”⁴¹.

De este modo, el conflicto se ha transformado en una guerra de la que se tiene noticia a través de los medios de comunicación. Una guerra que sufren “otros” y que permite a miles de personas vivir en la ilusión de que el país goza de democracia plena y prosperidad, a la vez que les impide entender la suma importancia de cada decisión, afirmación o negociación política para quienes la sufren. Un pacto de un cese al fuego representa para los campesinos la diferencia entre quedarse o huir, entre vivir o morir, en tanto que para quienes viven lejos de los lugares de enfrentamiento aquello no significa nada.

En este complejo escenario, se puede interpretar la guerra interna como un asunto de precariedad y debilidad de la democracia. La guerra ha terminado constituyéndose como un recurso destinado a impedir la democracia, y la violencia se ha transformado en el medio más recurrido para acallar a críticos y

41 *Ibidem*, p. 22.

opositores, dificultando la denuncia y evitando así los justos reclamos y transformaciones que amerita la sociedad colombiana.

En este mismo escenario, existen también contradicciones y limitaciones por parte de la justicia para afrontar el conflicto armado. La relativa independencia y credibilidad de las instituciones del Estado en muchas ocasiones ha terminado por ser configurada, tanto por cuenta de actores armados específicos o por cuenta de la dinámica compleja del conflicto armado colombiano, lo que ha inducido a la creación de diseños institucionales para enfrentar lo que en determinado momento ha sido considerado como la más grave amenaza, pero que en muchas ocasiones no es otra cosa que una vinculación del sistema de justicia a determinadas estrategias armadas.

La investigación realizada por el GMH demuestra empíricamente que el conflicto armado colombiano es uno de los más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina. Este ha causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012.

La violencia instalada durante muchas décadas en Colombia no es simplemente una suma de hechos, víctimas o actores armados, sino que es producto de “acciones intencionales” que se inscriben mayoritariamente en “estrategias políticas y militares”, y se asientan sobre complejas “alianzas y dinámicas sociales”.

Al 31 de marzo del 2013 el Registro Único de Víctimas-RUV⁴², reportó que 166.069 civiles fueron víctimas fatales del conflicto armado desde 1985 hasta esa fecha. Sin embargo, este balance es parcial debido a que el marco legal solo reconoce a las víctimas a partir del 1 de enero de 1985, lo que excluye a 11.238 víctimas documentadas en la base de datos del GMH entre 1958 y 1984. Asimismo, es importante señalar que en el RUV no están incluidos los combatientes muertos en las acciones bélicas. De acuerdo con la investigación del GMH, entre 1958 y 2012, murieron 40.787 combatientes. Es así como al integrar estas cifras es posible afirmar que el conflicto armado colombiano ha provocado aproximadamente 220.000 muertos. De estas muertes el 81,5% corresponde a civiles y el 18,5% a combatientes; es decir, que aproximadamente ocho de cada diez muertos han sido civiles y que, por lo tanto, son ellos los más afectados por la violencia.

Al contrastar estos datos en relación con otros tipos de violencia que afectan a la sociedad colombiana, se puede argumentar que una de cada tres muertes violentas que se producen en Colombia es producto del conflicto armado interno. Otro dato importante es que no existe simetría entre el número de muertos civiles versus combatientes, ya que se ha comprobado que la población civil ha resultado más afectada, ya que por cada combatiente caído han muerto cuatro civiles.

42 El Registro Único de Víctimas-RUV fue creado a partir del artículo 154 de la Ley 1.448 del 2011 para garantizar la atención y reparación efectiva de las víctimas (N. del A.).

Por otra parte, estudios de notable esfuerzo han logrado estimar que tres de cada cuatro homicidios han quedado fuera de las estadísticas. En efecto, el contexto de la violencia generalizada en el que discurre el conflicto es aprovechado por los actores armados legales e ilegales para hacer invisibles sus acciones y confundirlas con hechos violentos perpetrados por otros. Los victimarios recurren a sicarios y a prácticas de violencia como las desapariciones forzadas y los asesinatos selectivos. De esta manera, logran dificultar el esclarecimiento del crimen y difuminan su resonancia entre las múltiples modalidades y tipos de violencia.

La letalidad de la violencia del conflicto armado no ha sido homogénea ni constante. De una tendencia decreciente entre 1958 y 1964, marcada por la transición de la agresión bipartidista a la subversión, se pasó a una intensidad baja y estable entre 1965 y 1981. Esta coacción estuvo marcada por la irrupción de las guerrillas y su confrontación con el Estado. Posteriormente, entre 1982 y 1995, continuó una tendencia creciente marcada por la expansión de las guerrillas, la irrupción de los grupos militares, la propagación del narcotráfico, las reformas democráticas y la crisis del Estado.

Seguidamente se dio una tendencia explosiva entre 1996 y 2002, en la que el conflicto armado alcanzó su nivel más crítico como consecuencia del fortalecimiento militar de las guerrillas, la expansión nacional de los grupos militares, la crisis del Estado, la crisis económica, la reconfiguración del narcotráfico y su reacomodamiento dentro de las coordenadas del enfrentamiento armado.

Esta tendencia fue sucedida por una etapa decreciente que va desde el año 2003 hasta hoy, y ha estado marcada por la recuperación de la iniciativa militar del Estado, el repliegue de la guerrilla y la desmovilización parcial de los grupos paramilitares. Este período, sin embargo, plantea nuevas amenazas por el reacomodamiento militar de las guerrillas, el rearme paramilitar y el desgaste de la prolongación de la ofensiva militar del estado, que no ha podido dar fin al conflicto.

Por otra parte, la violencia del conflicto armado tiene una dimensión no letal que acarrea consecuencias igualmente graves. Al 31 de marzo de 2013 el RUV reportó 25.007 desaparecidos, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados, y 4.744.046 personas desplazadas. El GMH también reporta 27.023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010, mientras que el Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersonal-PAIMA reporta 10.189 víctimas de minas antipersonales entre 1982 y 2012.

D. LA COMPLEJIDAD DEL ESCENARIO POSCONFLICTO

Un primer aspecto necesario a considerar es que la situación de conflicto que se vive en Colombia tiene sus propias especificidades. El conflicto armado interno colombiano no es de orden biunívoco sino que del tipo multidimensional,

donde los actores armados son múltiples (militares, policías, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, etc.).

Por lo tanto, a diferencia de lo ocurrido en otros países del Cono Sur, Colombia no ha sido afectada por un problema derivado de las dictaduras militares, y en este contexto, la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) ha enfrentado a la guerrilla por mandato de sucesivos gobiernos democráticos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son organismos absolutamente aceptados por la sociedad colombiana, y en un escenario de posconflicto deberán enfrentar una desmovilización guerrillera que no será el punto final a los problemas de seguridad.

En un contexto de recursos estatales limitados, con un entorno jurídico complejo y con una situación vecinal inestable con Venezuela, Colombia deberá enfrentar el proceso de desmovilización de las FARC; la que necesariamente se debe producir en un escenario donde aún persistirán las estructuras criminalizadas y las economías ilícitas y, por lo tanto, un ambiente donde seguirá existiendo la violencia.

Los mayores retos en esta etapa de transición estarán representados por: 1) la necesidad de “verificar” el cumplimiento de los acuerdos, donde se deberá constatar que se produzca efectivamente la desmovilización y al mismo tiempo buscar “romper” la actividad criminal; 2) el enfrentamiento con las fuerzas que no acepten el acuerdo (tanto con las guerrillas como con las bandas criminales que tratarán de ocupar los espacios vacíos dejados por las propias FARC⁴³); 3) la obligación de garantizar la “protección” de los guerrilleros desmovilizados; y 4) la responsabilidad de seguir controlando el territorio nacional y continuar protegiendo las fronteras.

Los roles de la Fuerza Pública deberán continuar extendiéndose tanto en el ámbito de la seguridad interna como en el de la seguridad externa. En este contexto, seguirá siendo necesario el empleo de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad interior, ya que sería altamente desaconsejable no aprovechar las actuales capacidades que poseen en este ámbito, privilegiando eso sí la adquisición de mayor tecnología por sobre un mero incremento de una Fuerza más grande, en términos de dotación de personal.

La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico obliga a que el empleo de la Policía Nacional continúe siendo respaldado por las fuerzas militares. A modo de ejemplo se puede mencionar la seguridad “fluvial”, donde es clave el

43 Al desmovilizarse las fuerzas paramilitares integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el año 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se produjeron varios problemas entre los cuales sobresale el hecho de que este proceso permitió “legalizar” a capos del narcotráfico que se hicieron pasar por jefes paramilitares. Otra crítica dice relación con el incumplimiento de conocimiento de la verdad y reparaciones acordadas para con las víctimas de las AUC. Finalmente, la desmovilización de las AUC creó espacios vacíos, que en su momento fueron ocupadas por las FARC (N. del A.).

apoyo que debe seguir brindando la Infantería de Marina con sus medios especializados en términos de equipamiento y personal.

La situación que se vive en Colombia implica la necesidad de contar con fuerzas militares multidimensionales, donde tengan cabida misiones no solamente de guerra convencional sino que de asistencia humanitaria, de conflicto armado interno, y de operaciones de paz, entre otros aspectos. Por lo tanto, el proceso de desmovilización de las FARC, no implica una eventual “reducción” de roles de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflicto, sino que por el contrario estos serán ampliados.

Un segundo aspecto, más polémico aún que una eventual reducción de roles de los efectivos militares como producto de la desmovilización, es qué ocurrirá con los efectivos desmovilizados de las guerrillas de las FARC, y de aquello surge otra interrogante: ¿sería factible incorporar guerrilleros desmovilizados en la Fuerza Pública, para así poder atacar en “conjunto” a las nuevas amenazas (bandas criminales de narcotraficantes)? Al respecto, es necesario precisar que como parte de las negociaciones se debe considerar “el cómo incorporar” a la sociedad los guerrilleros desmovilizados. Esto sin duda es un “caso de negociación”, pero es distinto a otras negociaciones; de hecho, en el asunto de Colombia no existe una “igualdad” entre los actores que negocian y por lo tanto resulta más que evidente y muy poco probable que se llegue a incorporar desmovilizados de las FARC en la Fuerza Pública.

El actual proceso de negociación se produce entre un “organismo ilegal” y un “Estado legítimo”, por lo tanto no existe un marco legal que permita incorporar guerrilleros desmovilizados en la Fuerza Pública y, por otra parte, los efectivos de las FARC carecen de la educación mínima que les permita integrarse a un organismo del Estado como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas (la mayoría de los guerrilleros ni siquiera cuentan con la educación básica finalizada). Finalmente, es necesario entender que la guerrilla desmovilizada no puede ser incorporada a una actividad que implique el “uso de las armas”; lo que se debe hacer con los desmovilizados de la guerrilla es “alejarnos” totalmente de toda forma de violencia (aunque sea “violencia legítima” que practican los policías y militares).

Finalmente, un tercer aspecto a debatir guarda relación con la “Memoria Histórica” del conflicto armado interno colombiano, en cuya “construcción” es evidente que no se puede dejar de lado a la Fuerza Pública. La construcción de una Memoria Histórica del conflicto debe incorporar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en el debate, ya que solo de esta forma se puede suplir la falta de comunicación y de confianza entre civiles y militares en un país azotado por la violencia⁴⁴.

44 A modo de ejemplo se puede mencionar que en el caso de Perú, donde luego de 20 años de violencia se creó una Memoria Histórica, esta resultó a todas luces incompleta y cuestionada, al punto que posterior al

El concepto de “Memoria” tiende a ser identificado como un importante valor cultural y político de la mano de las luchas de la población y, en particular, de las organizaciones de derechos humanos ante la política sistemática de “desapariciones”, “represión clandestina” y “supresión” de las libertades individuales por acción de agentes estatales. Ante estas prácticas repudiables, las democracias afectadas han impulsado activas políticas de “reconstrucción de la memoria” y “descubrimiento de la verdad”, aludiendo fundamentalmente a “lograr dilucidar el destino” de los ciudadanos “desaparecidos” por acción del Estado.

Sin embargo, los estudios de “Memoria” no pueden constituir un patrimonio exclusivo de las víctimas civiles afectadas por el Estado y, por lo tanto, en un conflicto armado interno como el colombiano, cuya duración excede los 50 años, no se habla exclusivamente de una “victimización” de la población civil, sino que se reconoce también la existencia de miles de víctimas entre los propios integrantes de la Fuerza Pública y su grupo familiar.

Al respecto, debemos reconocer que Colombia ha dado importantes pasos encaminados a evitar las “distorsiones” producidas en los estudios de “Memoria” de países como Perú, entre otros. En Colombia, la Memoria es considerada un “debate público” y por lo tanto no es una “Memoria Estatal”. La construcción de esta Memoria se ha dado en pleno conflicto y ha apoyado a diferentes “colectivos” para que logren elaborar sus “propias” Memorias, y de hecho se ha permitido legalmente que la propia Fuerza Pública participe activamente en aquello⁴⁵.

III. CONCLUSIONES

El conflicto armado interno en Colombia presenta dos dimensiones: a) una letal con 220.000 muertos, de los cuales 40.000 corresponden a combatientes y 180.000 a civiles; y b) una no letal con 25.000 desaparecidos, 2.000 víctimas de violencia sexual, 6.000 casos de reclutamiento forzado, 5.000.000 de desplazados, 27.000 secuestros y 10.000 víctimas por minas antipersonales.

Informe Final de la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú, dado a conocer oficialmente el año 2003, el Ejército la rebatió oficialmente a través de otro informe, denominado en “Honor a la verdad”, el cual fue editado el año 2010 por la Comisión Permanente de Historia del Ejército de Perú, y donde se argumenta respecto de “la falta de imparcialidad” del primer texto y respecto a que “no fueron tomadas en cuenta las opiniones militares” en las investigaciones realizadas por la CVR (N. del A.).

45 A modo de ejemplo, se puede mencionar el Centro de Memoria Histórica Militar de Colombia (CMHM), el cual se encuentra adscrito a la Escuela Superior de Guerra y que fue creado bajo la Directiva Permanente N° 082 del 8 de julio de 2013 del Comando General de las Fuerzas Militares. Este Centro de Investigación Académico permite aportar “memoria” e “historia” para lograr “la verdad, la justicia y la reparación” sobre los hechos registrados durante el conflicto armado, así como planes de acción que permitan analizar, estudiar, planear alternativas y socializar de manera equilibrada las consecuencias de la violencia en Colombia y aporte para la proyección institucional de las fuerzas militares en el marco de un escenario de posconflicto (N. del A.).

En este conflicto se visualiza, por parte de los actores armados, una estrategia que ha combinado todas las “formas posibles de lucha”, desde la intención de legitimidad hasta el terrorismo indiscriminado, lo cual ha terminado “degradando” el conflicto armado interno hasta límites intolerables, y donde los actores armados y políticos han terminado confundidos con delincuentes comunes y terroristas.

En los largos años de violencia, Colombia ha sufrido el abandono estatal de regiones apartadas geográficamente y caracterizadas por la pobreza y falta de oportunidades. En este contexto, a partir del año 2002, el Estado se impuso el objetivo de recuperar militarmente el territorio y profundizar la guerra contra la guerrilla, lo cual con el apoyo monetario y tecnológico de EE.UU., permitió iniciar una ofensiva política, militar y jurídica.

Derivado de lo anterior, la Fuerza Pública durante el período comprendido entre los años 2002 y 2008 logró disminuir notablemente las capacidades ofensivas de las FARC, pero a costa de la “victimización” de la población civil, la cual ha sido objeto de “violencia ilegal”, caracterizada por detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas.

Sin embargo, y producto de exitosas acciones de eliminación selectiva de los principales líderes de las FARC, y de la disminución de sus efectivos en casi un 50%, esta organización se ha visto obligada a sentarse en la mesa de negociaciones.

A juicio del autor, en las actuales negociaciones de paz hay más posibilidades de lograr un acuerdo que en anteriores diálogos. Lo anterior, básicamente debido a que las FARC ya no tienen la fortaleza de otras épocas y no cuentan con las expectativas de triunfo que ostentaban en otras negociaciones.

Sin embargo, las FARC tampoco están derrotadas ni divididas. Actualmente plantean una guerra de resistencia que podría prolongarse gracias a los recursos provenientes del narcotráfico y a las alianzas con bandas criminales. En este contexto, una nueva fase del conflicto podría llevar a la aparición de nuevos actores armados, la degradación de algún sector de las actuales organizaciones guerrilleras o el reforzamiento de las nuevas bandas criminales.

Los avances de los diálogos de paz entre el Estado y la guerrilla en Colombia han estado plagados de una amplia gama de “pruebas de fuerza”, donde ambos actores han tratado de implantar su supremacía. El tiempo transcurrido ha demostrado que la balanza se continúa inclinando a favor de las acciones gubernamentales, dado que el alto al fuego “unilateral” autoimpuesto por las FARC ha sido trasgredido en una clara demostración de “falta de unidad de mando y disciplina” al interior de esa misma organización.

Por su parte, el gobierno de Santos ha buscado permanentemente “legitimar” su posición, cediendo terreno en algunos aspectos “simbólicos” tales como la eliminación de las acciones de “fumigaciones” de plantaciones de droga y la

designación de un nuevo Ministro de Defensa. Con todo lo anterior, se evidencia una clara intención de otorgar un giro a la supuesta “mano dura” heredada del gobierno de Álvaro Uribe.

No obstante lo anterior, Santos también ha demostrado que no está dispuesto a demostrar “debilidad” ante las acciones violentas de las FARC, y ha ordenado ataques aéreos que durante el mes de mayo han logrado disminuir aún más las capacidades de combate de la guerrilla.

El ambicioso objetivo de las FARC, consistente en lograr convertirse en un ejército regular, no pudo ser alcanzado en plenitud y menos aún se pudo vencer al Estado en el campo de batalla. En la actualidad, el costo de la guerra para las FARC se ha tornado cada vez más alto que la ganancia esperada en caso de que el conflicto continúe.

Si bien es cierto una retirada del “apoyo popular” puede provocar el colapso de un gobierno, también aquello puede ser precipitado por una “victoria militar decisiva”. En ambos aspectos, el Estado ha resultado vencedor. Las FARC no han logrado imponerse en “apoyo popular” y, lejos de lograr una victoria militar, su estrategia y métodos de combate han “degradado” la guerra hasta límites intolerables.

En el escenario de posconflicto, Colombia deberá enfrentar una “desmovilización” guerrillera que no será el punto final a los problemas de seguridad, ya que alcanzada la eventual paz entre la guerrilla y el Estado, aún persistirán las estructuras criminalizadas y las economías ilícitas y, por lo tanto, un escenario donde seguirá existiendo la violencia. En este contexto, persistirá la necesidad de asignar “nuevos roles” a la Fuerza Pública, antes que pensar en una “reducción” de efectivos o de capacidades.

Por otra parte, se considera muy improbable que los guerrilleros desmovilizados puedan ser “incorporados” a una actividad que implique el “uso de las armas” en un contexto de “violencia legítima”, que es lo que practican los integrantes de la Fuerza Pública. Muy por el contrario, la tendencia debería ser que los desmovilizados sean “alejados” totalmente de toda forma de violencia.

Finalmente, se considera que dada la importante experiencia previa de Colombia, respecto de la “construcción” de una “Memoria” mientras se desarrolla aún el conflicto armado interno, aquello contribuirá a evitar que se produzcan “distorsiones”, y con ello será posible avanzar con mayores posibilidades en el necesario proceso de búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación de una nación sumida en más de 50 años de lucha fratricida.

BIBLIOGRAFÍA

CASTELLANOS, Juliana; “¿Cuánto nos cuesta la guerra? Costos del conflicto armado colombiano en la última década”, Editorial del Politécnico Gran Colombiano, Bogotá, Colombia, 2013.

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH); “Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013”, Ed. Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2014.

EL MERCURIO; “Ocho muertos en bombardeo contra las FARC”, edición impresa del 24 de mayo de 2015, Cuerpo A p.5, Santiago, Chile.

EL MERCURIO; “Mueren 18 guerrilleros de las FARC en operación militar en el suroeste de Colombia”, edición impresa del 22 de mayo de 2015, Cuerpo A p. 4, Santiago, Chile.

EL MERCURIO; “Países de la región se apartan cada vez más de la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico”, edición impresa del 22 de mayo de 2015, Cuerpo A p.6, Santiago, Chile.

EL MERCURIO; “Un nombramiento impulsado por el proceso de paz con las FARC”, edición impresa del 21 de mayo de 2015, Cuerpo A p.6, Santiago, Chile.

EL MERCURIO; “Respaldo ciudadano a la gestión de Santos, en caída libre”, edición impresa del 11 de mayo de 2015, Cuerpo A p.6, Santiago, Chile.

EL MERCURIO; “La paz con las FARC y las repercusiones de La Haya marcarán el 2013 de Santos”, edición impresa del 2 de enero de 2013, Cuerpo A p.6, Santiago, Chile.

EL MERCURIO; “El Presidente Santos admite contactos con las FARC para iniciar un eventual proceso de paz”, edición impresa del 28 de agosto de 2012, Cuerpo A p.4, Santiago, Chile.

GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA (GMH); “Basta ya. Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, Imprenta Nacional, Bogotá, Colombia, 2013.

PÉCAUT, Daniel; “Guerra contra la Sociedad”, Editorial Planeta, Bogotá, Colombia, 2001 y LAIR, Eric; “Reflexiones acerca del terror en los escenarios de guerra interna”, en Revista de Estudios Sociales, N° 15, junio 2003.

RANGEL, Alfredo; “Colombia: guerra en el fin de siglo”, Editorial Tercer Mundo – Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 1998.

RANGEL, Alfredo; “Guerra Insurgente. Conflictos en Malasia, Perú, Filipinas, El Salvador y Colombia”, Intermedio Editores, Bogotá, Colombia, 2001.

VON CLAUSEWITZ, Karl; “De la guerra”, editorial Labor/Punto Omega, Barcelona, España, 1984.

Sitios de Internet

ELCORREO.COM; “Colombia suspende la aspersion con glifosato de cultivos ilícitos”, edición digital del 9 de mayo de 2015 20:37hrs., en: <http://www.elcorreo.com/alava/internacional/america-latina/201505/09/colombia-suspende-aspersion-glifosato-20150509200252-rc.html> (última visita: 21 de mayo de 2015).

UNIVISIONNOTICIAS; “Santos reanuda operaciones aéreas a las FARC tras ataque que dejó 11 soldados muertos”, edición digital del 15 de abril de 2015 en: <http://noticias.univision.com/article/2303813/2015-04-15/america-latina/colombia/al-menos-10-militares-colombianos-mueren-en-ataque-guerrillero> (última visita: 20 de mayo de 2015).